

NÚMERO: 472 / 2020

 Unidad Administrativa
 Área de Gestión de la
 Contratación

Exp.: ECON/000186/2020

Resolución de la *Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, por la que se procede a declarar la emergencia en la tramitación del expediente denominado **“CONTRATACIÓN DE LOS DESARROLLOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MUESTRAS ORALIMS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA”**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas según lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, y de conformidad con lo que establece el *Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y demás disposiciones de aplicación, y visto el informe de la Subdirección General de Soluciones.

RESUELVO

1. Declarar la Emergencia en la tramitación del expediente de contratación, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la **“CONTRATACIÓN DE LOS DESARROLLOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MUESTRAS ORALIMS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA”** por los motivos que se indican a continuación:

Con fecha 31 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Los primeros casos en la Comunidad de Madrid se confirmaron el 26 de febrero, se trataba de dos casos con vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo. El día 27 de febrero se diagnostican en la Comunidad de Madrid los primeros casos sin vínculo epidemiológico dentro del criterio B (cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad en la que se hayan descartado otras posibles etiologías infecciosas que puedan justificar el cuadro). Desde esa fecha hasta la actualidad ascenso en el número de casos confirmados ha sido exponencial y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra difícilmente asumible.

De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Con este propósito, en el BOCM núm. 59, de 10 de marzo, se hizo pública la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el artículo 16 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los servicios se contratarán mediante la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que señala que:

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente (...)"

La norma transcrita contiene una inequívoca declaración sobre la aplicación a todos los contratos que hayan de celebrarse por el sector público que tengan por objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, de la tramitación de emergencia contenida en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP, que regula un régimen excepcional de actuación para el caso de que la Administración tenga que actuar de manera inmediata ante situaciones críticas, se justifica la contratación, mediante tramitación de emergencia, de los desarrollos necesarios para la conexión entre los equipos analizadores y el sistema de gestión de muestras ORALIMS para la realización de estudios de seroprevalencia.

Por todo ello, teniendo en cuenta la imposibilidad de llevar a cabo la contratación mediante tramitación ordinaria o urgente, es necesario dar respuesta de manera eficaz y con las garantías requeridas, evitando así causar perjuicios en la prestación del servicio público.

La tramitación de emergencia que se acuerda se fundamenta, por consiguiente, en la imperiosa y urgente necesidad de contar con estudios de seroprevalencia, que proporcionen a la Dirección General de Salud Pública información para entender la trazabilidad de los contagios del COVID-19 y sus factores moduladores.

2. Ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias para adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de contratar los desarrollos necesarios para la conexión entre los equipos analizadores y el sistema de gestión de muestras ORALIMS para la realización de estudios de seroprevalencia.
3. El presupuesto estimado para la contratación de los trabajos objeto del expediente se fija en 60.000 euros.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

